



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, diecinueve de agosto de dos mil veintidós

E21-047

REFERENCIA: APELACIÓN AUTO
EJECUTANTE: COLFONDOS S.A.
EJECUTADO: TERESITA MOGOLLON AGUILAR
RADICADO: 05088-31-05-001-2020-00466-01
DECISIÓN: **REVOCA:** ordena librar mandamiento.

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL**, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la sociedad ejecutante contra la decisión mediante la cual el juzgado de origen se negó a librar mandamiento de pago.

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 24** de discusión, que se adopta como auto, en los siguientes términos:

1. SÍNTESIS FÁCTICA Y ANTECEDENTES

- El 15 de diciembre de 2020 el apoderado de la entidad ejecutante solicitó ante el Juez de conocimiento que librara mandamiento de pago por la suma de \$24.664.845 correspondiente a la sumatoria del capital de la obligación a cargo del empleador ejecutado por los aportes en pensión obligatoria (entre 01/01/95 y 01/05/06) y los intereses de mora causados respecto del trabajador Alejandro Acevedo Uribe.
- Afirma que los trabajadores relacionados en el estado de cuenta anexo se encuentran afiliados al fondo, siendo el empleador el responsable frente a las entidades de seguridad social por el pago del aporte, razón por la que adelantó acción de cobro, aclarando que la ejecutada no contestó el requerimiento previo que efectuó, ni ha cancelado lo adeudado, ni ha reportado alguna novedad.

- Mediante auto del 20 de enero de 2021, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bello se abstuvo de librar mandamiento de pago, decisión objeto del recurso de reposición y en subsidio apelación, el primero de ellos resuelto desfavorablemente.

2. ARGUMENTOS

2.1. DEL JUEZ PARA RECHAZAR

Tras citar lo normado en el art. 100 del CPT y la SS, el art. 422 del CGP, así como el art. 2 del Decreto 2633 de 1994, y recordar que todo título ejecutivo, singular o complejo (como en este caso), debía reunir tres requisitos (claro, expreso y exigible), expuso que la UGPP fijó los estándares de cobro que deben cumplir las diferentes administradoras que integran el Sistema General de Pensiones, inicialmente a través de la Resolución No. 444 del 28 de junio de 2013, disposición subrogada a partir del 1° de julio de 2017 por la Resolución 2082 de 2016, en la que se indica en sus artículo 8° y 9°, que dichas administradoras deben realizar un aviso de cumplimiento ante los aportantes deudores que se encuentren en mora igual o superior a treinta días calendario en el pago de sus aportes contados a partir de la fecha límite de pago, el cual deben de realizar dentro de los términos fijados en dicha normatividad en su anexo técnico capítulo 2°.

Continúa referenciando que:

De igual manera, la Resolución 2082 de 2016, en sus artículos 10 al 13, señala los estándares que deben cumplir las acciones de cobro que lleven a cabo dichas administradoras del sistema, así:

“ARTÍCULO 10. OBJETIVO. El estándar de acciones de cobro tiene como finalidad propiciar el pago voluntario e inmediato de la obligación que el aportante adeuda al Sistema de la Protección Social, y el inicio de las acciones judiciales o de jurisdicción coactiva a que hubiere lugar.

“ARTÍCULO 11. CONSTITUCIÓN TÍTULO EJECUTIVO. La Unidad verificará que las administradoras privadas hayan expedido en un plazo máximo de cuatro (4) meses contado a partir de la fecha límite de pago, la liquidación que preste mérito ejecutivo sin perjuicio de lo dispuesto en las normas legales aplicables al respectivo subsistema. Y para las administradoras públicas, el plazo máximo para expedir el acto administrativo que preste mérito ejecutivo, es de seis (6) meses.

“ARTÍCULO 12. ACCIONES PERSUASIVAS. Una vez las Administradoras constituyan el título que presta mérito ejecutivo, deben contactar al deudor como mínimo dos veces. El primer contacto lo deben realizar dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la constitución 1 firmeza del título ejecutivo, según el caso, y el segundo, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha en que se realizó el primer contacto, sin superar cuarenta y cinco (45) días calendario, de conformidad con los criterios que se definen en el Anexo Técnico Capítulo 3.

“ARTÍCULO 13. ACCIONES JURÍDICAS. Vencido el plazo anterior las administradoras contarán con un plazo máximo de cinco (5) meses para dar inicio a las acciones de cobro coactivo o judicial, según el caso.”

De lo hasta acá expuesto y transcrito, se logra concluir que para poder iniciar procesos ejecutivos vía judicial por cobro de los aportes en mora, la administradora del sistema de protección social, deberá cumplir no solo con los parámetros generales exigidos por el artículo 100 y ss. del CPL, el artículo 422 del CGP y del artículo 24 de la Ley 100 de 1993, sino también, **debe cumplir con el procedimiento establecido en la Resolución 2082 de 2016, requisitos que a saber son:**

1. El aviso de incumplimiento, el cual debe ser remitido al deudor en los términos establecidos en los artículos 8° y 9° de la Resolución 2082 de 2016.
2. Para las administradoras privadas del sistema de protección social, la expedición en un máximo de 4 meses, contados a partir de la fecha límite de pago, de la liquidación que preste mérito ejecutivo.
3. Una vez constituido el título ejecutivo, se deben realizar las acciones persuasivas que implican "(...) contactar al deudor como mínimo dos veces (...)", la primera vez a los 15 días siguientes a la data en que adquiere firmeza el título ejecutivo y la segunda, 30 días posteriores al primer contacto, sin superar el término de 45 días en total.
4. Una vez adelantado el trámite anterior, y sin sobrepasar el término de 5 meses, se podrán iniciar las acciones judiciales en contra de los deudores.

De esta manera, **ante la ausencia de alguno de estos presupuestos, conlleva necesariamente que el título carezca de sus requisitos formales.**

En el presente caso, se tiene que si bien la parte actora señala en su escrito demandatorio que la parte ejecutada no contestó los requerimientos previos efectuados por COLFONDOS SA para la solución definitiva de la deuda de aportes de pensión obligatoria, y que tampoco ha realizado reporte de novedades o desafilaciones respecto de la planta de personal, el Despacho observa que no se cumplió con el procedimiento para que el título cumpla con los requisitos formales.

Al realizar un estudio de los documentos allegados con la demanda ejecutiva, se tiene que la parte actora no dio cumplimiento efectivamente a los requisitos anteriormente enlistados, pues se evidencia que, en relación a las acciones persuasivas posteriores a la elaboración del título, se observa que las mismas brillan por su ausencia en el presente trámite, sin que la parte actora, haya indicado siquiera someramente la presencia de alguna causal que diera pie a la no realización de dichas acciones de cobro.

Colorario de lo aquí expuesto, teniendo en cuenta que no es procedente inadmitir la demanda, puesto que los defectos de los que adolece el "título" no son simplemente los formales, sino que sus vicios se predicen del "título" mismo, por lo que se negará el mandamiento de pago.

De otro lado, al resolver el recurso de reposición, insistió que el fondo NO realizó todo el procedimiento previo a demandar ejecutivamente a la pasiva, situación que indefectiblemente iba en contravía de lo normado en la Resolución 2082 de 2016, lo que a su vez vulneraba el derecho al debido proceso, tornándose improcedente el mandamiento solicitado.

2.2. DE LA PARTE EJECUTANTE EN EL RECURSO DE APELACIÓN

Comienza por señalar que la acción de cobro adelantada por la entidad ejecutante únicamente se circunscribe a lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, razón por la cual remitió documento de cobro a la dirección suministrada por el empleador y como NO se pronunció dentro de los quince días siguientes, emitió la liquidación.

Refiere que el Despacho está basando su decisión en una norma que no resulta aplicable al procedimiento de cobro, como lo era la Resolución 2082 de 2016, atinente a funciones de fiscalización y sanción que se encuentran en cabeza de la UGPP, es decir, no se trata de una preceptiva que propiamente cobije las acciones de cobro

Añade que tiene una obligación legal de adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento en los aportes de las cotizaciones en pensión obligatoria, y su génesis emana de lo estipulado en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993, no de una normatividad diferente.

En dichos términos solicita se libre mandamiento de pago.

2.3. ALEGATOS COLFONDOS S.A.

Insiste que debe ser revocada la decisión de primera instancia toda vez que el título ejecutivo que aportó para soportar el cobro referenciado, se finca en las acciones que permite a las administradoras privadas el artículo 24 de la Ley 100 de 1993. Aclara que previo a su emisión, fueron respetados los plazos que establece el Decreto 2633 de 1994 en su artículo 5, es decir, remitió requerimiento de constitución en mora a la empleadora, pero como dentro del plazo legal – (15 días) – no manifestó reparo, ni oposición, procedió a elaborar la liquidación que presta mérito ejecutivo.

Considera que estas son las únicas actuaciones que deben ser observadas al momento de emitir el documento de cobro, de ahí que las gestiones de la UGPP no resultan aplicables a este tipo acciones desplegadas por la administradora en procura de recuperar para los trabajadores los aportes dejados de consignar. Reitera que la normativa traída a colación por el despacho para negar la pretensión de pago, no resulta de procedente aplicación ya que se refiere a las funciones de fiscalización y sanción, no propiamente a las de cobro como las que se presentan en esta causa.

Finalmente refiere que la cartera que se presenta en esta oportunidad es una de las catalogadas por la entidad como de alta dificultad en recuperar y en estos casos, como lo evidencia el anexo técnico de la Resolución N° 2082 de 2016, capítulo 3: estándar de acciones de cobro, n° 3.3.2, adjunto, se constituye en una excepción para realizar las acciones persuasivas que son señaladas por el Despacho en primera instancia como necesarias para la procedencia del cobro.

3. DETERMINACIÓN Y SOLUCIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO

Se circunscribe a establecer si tratándose de acciones de cobro contra empleadores en mora, es dable exigir a la administradora del fondo de pensiones el cumplimiento de los requisitos contemplados en la Resolución 2082 de 2016.

De otro lado, se advierte que es competente esta Corporación para conocer del asunto debatido toda vez que conforme lo dispone el numeral 8º del artículo 65 del CPT y la SS, es apelable el auto que *decida sobre el mandamiento de pago*.

Aclarado lo anterior, para efectos de resolver la dubitativa planteada a la luz, debemos comenzar por precisar que a la luz de lo dispuesto en el art. 24 de la Ley 100 de 1993, así como sus decretos reglamentarios, se faculta a la Administradora de Fondo de Pensiones a efectuar las acciones de cobro ejecutivo contra quien se aduce ostenta la calidad de empleador moroso.

Y es que nos encontramos ante la ejecución adelantada por una administradora que persigue el pago de aportes en mora, con sujeción a lo dispuesto en el artículo en mención cuyo tenor es:

“Acciones de Cobro. Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del empleador de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto, la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor adeudado, prestará mérito ejecutivo”. (Subraya propia)

Así mismo los artículos 2º y 5º del Decreto 2633 de 1994, a través del cual se reglamentó la norma en mención, con antelación a la compilación que realizó el Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016¹, regulaba la forma en que se ha de efectuar el respectivo:

“Del cobro por vía ordinaria. En desarrollo del artículo 24 de la Ley 100 de 1993, las demás entidades administradoras del régimen solidario de prima media con prestación definida del sector privado y del régimen de ahorro individual con solidaridad adelantarán su correspondiente acción de cobro ante la jurisdicción ordinaria, informando a la Superintendencia Bancaria con la periodicidad que esta disponga, con carácter general, sobre los empleadores morosos en la consignación oportuna de los aportes, así como la estimación de sus cuantías e interés moratorio, con sujeción a lo previsto en el artículo 23 de la Ley 100 de 1993 y demás disposiciones concordantes.

“Vencidos los plazos señalados para efectuar las consignaciones respectivas por parte de los empleadores, la entidad administradora, mediante comunicación dirigida al empleador moroso lo requerirá. Si dentro de los quince (15) días siguientes a dicho requerimiento el empleador no se ha pronunciado, se procederá a elaborar la liquidación, la cual prestará mérito ejecutivo de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993”.

Acorde con lo anterior, es claro que las administradoras de pensiones tienen no solo la facultad sino la obligación de efectuar las acciones de cobro a los empleadores que presenten mora en el pago de aportes a la pensión. De igual manera se encuentra una de las principales excepciones en materia

¹ ARTÍCULO 2.2.3.3.5. DEL PROCEDIMIENTO PARA CONSTITUIR EN MORA AL EMPLEADOR. Vencidos los plazos señalados para efectuar las consignaciones respectivas por parte de los empleadores, la entidad administradora, mediante comunicación dirigida al empleador moroso lo requerirá. Si dentro de los quince (15) días siguientes a dicho requerimiento el empleador no se ha pronunciado, se procederá a elaborar la liquidación, la cual prestará mérito ejecutivo de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993.

de títulos ejecutivos, ya que para la consolidación del mismo no se requiere que provenga del deudor y por el contrario legalmente se le otorga la facultad de que sea la misma administradora quien proceda a la elaboración del título ejecutivo, pero establece a su vez un ÚNICO requisito previo para su conformación y es el requerimiento que se debe hacer al empleador, informándole la mora en la que está incurriendo y solo pasados 15 días de dicho requerimiento se habilita a la administradora para que proceda a la elaboración del título ejecutivo.

Fueron estas las consideraciones emanadas de la H. Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral radicado 34.270 del 22 de julio de 2008, M.P., Doctor EDUARDO LOPEZ VILLEGAS:

“(…) Las administradoras de pensiones y no el afiliado, tienen por ley la capacidad de promover acción judicial para el cobro de las cotizaciones, por lo tanto no se puede trasladar exclusivamente la responsabilidad de la mora en el pago de las cotizaciones a los empleadores, sino que previamente se debe acreditar que las administradoras hayan adelantado el proceso de gestión de cobro, y si no lo han hecho la consecuencia debe ser el que se les imponga el pago de la prestación.

Se ha argüido que la atribución de las prestaciones en caso de mora en las cotizaciones a las administradoras de pensiones afecta el equilibrio financiero del sistema; pero es que éste no puede obtenerse disminuyendo la cobertura y en perjuicio del trabajador que sí cumplió con su deber ante la seguridad social como era causar la cotización con la prestación de sus servicios, sino mediante la acción eficaz de las administradoras de pensiones de gestionar el recaudo de los aportes, pues ese mecanismo no puede valer para proteger a las administradoras contra riesgos causados y no para la protección del afiliado.

En el caso de las entidades del régimen de prima media, pueden proceder al cobro coactivo para hacer efectivos sus créditos; los artículos 2° y 5° del Decreto 2633 de 1994 establecen el requerimiento previo, mediante comunicación escrita dirigida al empleador, como procedimiento en mora por el pago de los aportes a la seguridad social; y si dentro de los quince días siguientes al aviso no se pronuncia el empleador, señalan las normas aludidas, se procede a efectuar la liquidación, la cual presta mérito ejecutivo cuando se trate de administradoras del régimen solidario de prima media (…).”

Considera la Sala que si por excepción legal se permite al mismo acreedor la elaboración del título ejecutivo y para tal efecto sólo dispone de un requerimiento previo al demandado, el mismo debe efectuarse bajo todas las garantías legales y constitucionales del debido proceso, con la prueba contundente de que dicho requerimiento fue efectivamente ENVIADO a la parte morosa con el fin de proceder a la elaboración del título ejecutivo. Salvo la acreditación de tal hecho, ninguna otra circunstancia, en principio, le es dable demostrar al fondo para que surja el aludido título.

No obstante, el a quo cimenta su determinación en el incumplimiento de las nuevas exigencias introducidas por la Resolución 2082 de 2016.

Consultada la norma se aprecia que la misma fue expedida por Directora General Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), y en cuanto al ámbito de aplicación reza el artículo 2 lo siguiente:

Las Administradoras Públicas y Privadas de la Protección Social conformado por el Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones y Riesgos Laborales), el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las Cajas de Compensación Familiar (CCF), están obligadas al cumplimiento de los estándares de cobro que se establecen en la presente resolución, **sin perjuicio del procedimiento y los términos establecidos en las disposiciones legales que le aplican para el ejercicio de sus respectivas funciones.** (Resaltos propios)

He aquí un primer aspecto a resaltar, pues reconoce que existen disposiciones legales, para el caso, aplicables a las administradoras de fondos de pensiones, que regulan expresamente las acciones de cobro de las cotizaciones adeudados al régimen pensional.

Aunado a ello, la resolución en comento dispone en su artículo primero el objeto de la misma, cual es definir y determinar el alcance de los estándares que deben adoptar las *Administradoras de la Protección Social* en el cumplimiento de las acciones de seguimiento y cobro a los aportantes morosos obligados en el pago de las **Contribuciones Parafiscales de la Protección Social**, atendiendo principios de eficacia, eficiencia y efectividad, así como establecer las conductas sancionables y la dosificación de la sanción a imponer dentro de la competencia otorgada en el numeral 4 del artículo 179 de la Ley 1607 de 2012 (que igualmente se refiere al cobro de contribuciones parafiscales).

Así pues, NO guarda identidad los procedimientos que deben adelantar las entidades bien para ejercer acciones de cobro de contribuciones parafiscales, o bien para ejercer acciones de cobro de aportes al régimen pensional.

Incluso exige el despacho, con apego a los artículos 11 y 12 de la Resolución 2082 de 2016, que la administradora privada haya expedido en un plazo *máximo de cuatro (4) meses contado a partir de la fecha límite de pago* la liquidación que preste mérito ejecutivo, exigencia que de alguna manera estaría imponiendo un término de prescripción disímil al que se aplica cuando se trata de acciones de cobro contra empleadores morosos en el pago de las cotizaciones a pensión.

En todo caso, esos mismos artículos, nuevamente advierten que el término allí contemplado, lo es *sin perjuicio de lo dispuesto en las normas legales aplicables al respectivo subsistema*. Nuevamente reconoce que cada subsistema, dígase salud, pensiones o riesgos, puede estar regido por un plazo diferente, y en todo caso tampoco sería factible que una norma especial, de un rango inferior a la ley y expedida por la UGPP, imponga modificaciones a preceptivas de mayor jerarquía, como lo serían los decretos reglamentarios que emiten los lineamientos que, para este caso, debe cumplir Colfondos, y que sea decirlo desde ya, se aprecian satisfechos.

En gracia de discusión, la misma intelección habría de efectuarse de cara a las acciones persuasivas que determina el art. 12 de la Resolución 2082 de 2016, las cuales son procedentes realizar *una vez las Administradoras constituyan el título que presta mérito ejecutivo*, es decir, tras emitir el título es que *deben contactar al deudor como mínimo dos veces*², no antes como parece entenderlo el a quo, y en todo caso, como aduce el recurrente, NO es una disposición aplicable a este evento, razón por la cual NO es dable al operador jurídico abstenerse de darle el correspondiente trámite al proceso ejecutivo cuando en parte alguna se somete la constitución del título base de recaudo a los requerimientos que enlistó el juez en primera instancia.

En igual sentido razonó este tribunal en el proceso radicado 01088-31-05-001-2021-00272-01 cuando adujo que:

SL5665-2021, Rad 89279 del 01/12/2021 M.P FERNANDO CASTILLO CADENA

“Se tiene -y solo aludiendo a este precepto-, que la AFP no dio cuenta del cumplimiento del deber fijado por esta norma, consistente en que pasados 3 meses en que incurrió en mora el empleador, esta hubiera iniciado el cobro extra judicial e, inclusive, la acción judicial. Resulta oportuno recordar que las administradoras de naturaleza privada, **les corresponde constituir en mora al deudor moroso en el pago de los aportes a efectos de proceder ante la jurisdicción ordinaria para obtener el pago de la acreencia, para lo cual la ley dotó a la liquidación, emanada de la administradora, de mérito ejecutivo...**”.

Así las cosas, la Sala no está de acuerdo con el A quo en cuanto se abstuvo de librar mandamiento de pago, rechazando la presente acción Ejecutiva, bajo el argumento de que para poder iniciar el trámite ejecutivo vía judicial por cobro de los aportes en mora, Protección S.A debía cumplir no solo con el artículo 100 y ss. del CPL, el artículo 422 del CGP y el artículo 24 de la Ley 100 de 1993, sino también, con el procedimiento establecido en la Resolución 2082 de 2016; pues como bien se dejó sentado en la normatividad y jurisprudencia en cita, la liquidación mediante la cual la Administradora determinó el valor adeudado, es el que presta mérito ejecutivo, sin que se exija un protocolo u anexo técnico para que dicho documento tenga validez.

Y es que aunque es cierto que la Resolución 2082 de 2016 exige a las Administradoras el cumplimiento de un protocolo bajo unos estándares de cobro fijados, no es menos cierto que la consecuencia jurídica de su incumplimiento conlleva una sanción pecuniaria a favor de la UGPP, más no la pérdida de Validez del título Ejecutivo, tal como lo hizo notar la parte apelante.

Precedente horizontal con el que guarda coincidencia esta Sala.

De otro lado, de acuerdo con el art. 33 del Código de Comercio, le corresponde al inscrito informar a la Cámara de Comercio cualquier cambio de domicilio. Para el caso, el requerimiento que exige la Ley se realizó a la Carrera 49 Nro. 45-35 en el Municipio de Bello –Antioquia en octubre de 2020, coincidente con la dirección informada en el registro mercantil, de ahí que se entienda agotado el único requerimiento que exige la ley.

² Según dicha norma el primer contacto lo deben realizar dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la constitución 1 firmeza del título ejecutivo, según el caso, y el segundo, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha en que se realizó el primer contacto, sin superar cuarenta y cinco (45) días calendario, de conformidad con los criterios que se definen en el Anexo Técnico Capítulo 3.

En consecuencia, se **REVOCARÁ** la decisión objeto del recurso de alzada y en su lugar se ordenará al a quo que libre mandamiento en los términos pretendidos y continúe con la ejecución. Sin costas en esta instancia.

DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL** administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, **DECIDE**


PRIMERO: REVOCA el auto del 20 de enero de 2021 proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bello y en su lugar se ordena al Despacho que **libre mandamiento** en los términos pretendidos y continúe con el respectivo trámite del proceso ejecutivo laboral instaurado por **COLFONDOS S.A.** contra la señora **TERESITA MOGOLLON AGUILAR**, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

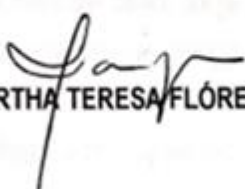
SEGUNDO: sin costas en esta instancia. Lo anterior se notificará en **ESTADOS**, y se firma por quienes en ella intervinieron.

(Firmas escaneadas)

Los Magistrados,


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA


LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO

CERTIFICO: Que la providencia anterior fue notificada por **ESTADOS No. 147** fijados hoy en la secretaría de este Tribunal a las 8 a.m.

Medellín 22 DE AGOSTO DE 2022

Secretario

CONSULTABLE EN: <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/130>